

AUDITAR ES NEOLIBERAL PERO ROBAR CON NARRATIVA ES REVOLUCIÓN

MORENA GRITÓ ADIÓS A LA CORRUPCIÓN MIENTRAS ENTERRABA A LA AUDITORÍA

Síntesis

1

El país ha transitado por tres modelos de control institucional. El PAN sostuvo el funcionamiento del sistema de Auditoría. El PRI redujo su intensidad. Morena lo desactivó mientras sostenía que el problema ya estaba resuelto. Morena no erradicó la corrupción, la volvió menos visible, debilitó los mecanismos de detección y redujo la capacidad del Estado para corregir y sancionar.

Introducción

La corrupción en el sector público no siempre se ve. A diferencia de otros fenómenos económicos que pueden medirse con precisión, ésta actúa de forma discreta. Se esconde en contratos opacos, en facturas infladas, en obras que no se terminan, en pagos indebidos y en decisiones que desvían recursos sin dejar rastro claro. Frente a esto, la auditoría gubernamental se convierte en la herramienta clave para rastrear sus efectos. Es el mecanismo técnico con el que el Estado revisa, evalúa y, si es necesario, corrige el uso del dinero público.

La tabla que cubre el periodo 2000 a 2025 permite observar con claridad este fenómeno. Sus columnas, que incluyen recuperaciones, costos, auditorías, observaciones, saldos y casos de presunta responsabilidad, ofrecen una radiografía del funcionamiento administrativo. También muestran cómo ha cambiado la corrupción a lo largo de cinco gobiernos. Cada dato aporta una parte del panorama completo.

El número de contralorías internas señala cuántas entidades están bajo vigilancia. No se trata de cuánto se revisa, sino de cuántos sujetos están en el sistema de control. Esta cifra ayuda a entender si los cambios en los resultados responden a una expansión o a una reducción de la cobertura institucional, o bien a decisiones que ajustan el alcance de la fiscalización.

Las cifras de recuperaciones y costos permiten medir la dimensión financiera del problema. Las primeras indican cuánto dinero fue recuperado tras detectarse un uso inadecuado o injustificado. Los segundos reflejan el gasto público invertido en el proceso de revisión. Comparar ambas variables permite saber si la auditoría está dando resultados. Si el dinero que se recupera es mayor al que se gasta en fiscalizar, el sistema funciona. Si no es así, el desequilibrio puede señalar una debilidad técnica o una falta de voluntad institucional.

La cantidad de auditorías, visitas y revisiones muestra el nivel de actividad operativa. La corrupción no se detecta sola. Si se audita menos, se encuentra menos. Una baja en esta cifra rara vez implica una mejora. Casi siempre refleja una menor capacidad para supervisar o una decisión de reducir el alcance de la vigilancia.

Las observaciones determinadas, el saldo inicial, las nuevas observaciones, las solventadas y las que siguen pendientes describen el ciclo completo del control interno. Cada observación representa una irregularidad. El saldo inicial muestra lo que quedó sin resolver de años anteriores. Las observaciones nuevas indican lo que se detectó durante el periodo. Las solventadas revelan qué tanto se corrigió. El saldo final muestra lo que no se atendió. Si las observaciones bajan, pero también cae el número de auditorías, eso no significa que haya menos irregularidades, sino que se detectan menos. Si el saldo pendiente sube, las fallas se acumulan.

Los casos de presunta responsabilidad marcan el momento en que la auditoría deja de ser solo una revisión administrativa. Estos casos pueden iniciar procedimientos disciplinarios, administrativos o penales. Una baja repentina puede deberse a que se detectan menos faltas graves, pero también puede reflejar una menor voluntad de sancionar. Como la corrupción suele hacerse más compleja en lugar de desaparecer, estas cifras deben leerse con cuidado. Una caída no siempre indica mejora. Puede ser un signo de impunidad.

Con todos estos elementos es posible seguir la evolución del control del gasto público. No se trata de nombres propios ni de escándalos mediáticos. **Lo que muestran los datos es el comportamiento real del sistema cuando no hay discursos de por medio. El análisis permite comparar gobiernos, separar el discurso de los resultados verificables y entender cuándo funcionó el sistema de auditoría y cuándo se debilitó.**

El balance sexenal lleva a una conclusión clara. **La capacidad de auditoría del Estado mexicano ha perdido cobertura, fuerza y eficacia.** A pesar de presentarse como un gobierno con compromiso en el combate a la corrupción, el gobierno de Morena muestra los peores resultados técnicos de todo el periodo analizado.

Tabla 1. Auditorías gubernamentales por año y sexenio (promedio)

Año	Universo de contralorías internas	Recuperaciones (millones de peso de 2018)	Costos (millones de pesos de 2018)	Actos de fiscalización	Saldo inicial	Detectadas	Solventadas	Saldo final	Casos de presunta responsabilidad
2001	300.0	7,216.0	6,559.1	7,051.0	6,314.0	17,227.0	10,347.0	13,194.0	2,335.0
2002	219.0	10,262.8	7,066.8	5,917.0	13,194.0	12,933.0	14,213.0	11,194.0	1,944.0
2003	216.0	9,741.8	6,854.9	4,544.0	11,914.0	11,100.0	12,635.0	10,379.0	1,746.0
2004	219.0	5,463.4	6,046.5	4,112.0	10,379.0	10,904.0	12,734.0	8,549.0	1,521.0
2005	221.0	29,504.2	6,221.1	4,101.0	8,549.0	10,140.0	11,588.0	7,101.0	1,020.0
2006	212.0	4,588.3	6,280.7	3,479.0	7,101.0	7,975.0	10,633.0	4,443.0	684.0
2007	212.0	3,187.8	6,313.2	4,031.0	4,443.0	14,946.0	9,522.0	9,867.0	1,025.0
2008	210.0	3,572.0	6,192.2	3,645.0	9,867.0	12,013.0	13,482.0	8,398.0	579.0
2009	207.0	4,407.7	5,795.3	3,344.0	8,398.0	12,459.0	11,964.0	8,893.0	338.0
2010	207.0	4,544.2	5,694.1	3,010.0	8,893.0	10,767.0	11,348.0	8,312.0	423.0
2011	215.0	9,616.1	5,319.8	1,982.0	8,312.0	9,913.0	10,851.0	7,374.0	333.0
2012	219.0	4,555.2	5,497.2	1,059.0	7,374.0	5,652.0	10,132.0	2,894.0	589.0
2013	219.0	2,330.9	3,985.2	2,152.0	2,894.0	10,456.0	6,270.0	7,080.0	621.0
2014	217.0	4,815.1	5,194.8	2,381.0	7,080.0	9,935.0	9,663.0	7,368.0	348.0
2015	213.0	2,516.4	4,223.1	2,408.0	7,368.0	9,656.0	10,594.0	6,430.0	228.0
2016	216.0	824.2	3,173.2	2,282.0	6,430.0	8,863.0	9,932.0	5,901.0	149.0
2017	218.0	1,088.5	3,542.7	2,266.0	5,901.0	8,980.0	11,205.0	4,756.0	107.0
2018	219.0	854.6	3,727.9	1,826.0	4,756.0	5,346.0	8,766.0	1,336.0	240.0
2019	220.0	617.8	2,664.2	1,983.0	1,336.0	6,893.0	4,659.0	5,370.0	614.0
2020	222.0	2,042.2	3,072.3	1,535.0	5,370.0	6,941.0	4,729.0	7,582.0	736.0
2021	220.0	861.4	2,515.5	2,098.0	7,032.0	8,281.0	7,972.0	7,341.0	416.0
2022	221.0	1,485.1	2,906.2	2,551.0	7,399.0	8,651.0	9,900.0	6,150.0	674.0
2023	213.0	1,379.0	4,114.3	2,262.0	6,079.0	6,534.0	9,300.0	3,333.0	1,193.0
2024	95.0	992.5	1,403.6	1,271.0	3,062.0	2,786.0	5,191.0	657.0	390.0
Fox	231.2	11,129.4	6,504.9	4,867.3	9,575.2	11,713.2	12,025.0	9,143.3	1,541.7
Calderón	211.7	4,980.5	5,802.0	2,845.2	7,881.2	10,958.3	11,216.5	7,623.0	547.8
Peña	217.0	2,071.6	3,974.5	2,219.2	5,738.2	8,872.7	9,405.0	5,478.5	282.2
Obrador	198.5	1,229.7	2,779.4	1,950.0	5,046.3	6,681.0	6,958.5	5,072.2	670.5

Fuente: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sistema Integral de Auditorías

Periodo del PAN (2001–2012): gobiernos que hicieron visible la corrupción y la enfrentaron

Los gobiernos del PAN, tanto con Vicente Fox como con Felipe Calderón, mostraron un comportamiento distinto frente a la corrupción que los gobiernos del PRI y Morena. No la eliminaron, pero tampoco intentaron ocultarla. Permitieron que se documentara, que se midiera, que se registrara en cifras y que se enfrentara con herramientas institucionales que, aunque con limitaciones, durante esos dos sexenios la auditoría no se apagó.

Ambas administraciones operaron con un promedio similar de contralorías internas, cerca de 220 en cada caso. Esto demuestra que el cambio no estuvo en el tamaño de la estructura, sino en el uso que se le dio. Con la misma capacidad instalada, un

sistema puede activarse o dejarse inactivo. Durante los gobiernos del PAN, a pesar de los altibajos, el aparato de fiscalización siguió funcionando.

Vicente Fox: la auditoría más intensa y más rentable de toda la serie

Durante el sexenio de Vicente Fox, la auditoría operó con una intensidad que no volvió a repetirse en gobiernos posteriores. El promedio anual alcanzó 4,867 auditorías, y en 2001 se superaron las siete mil. Ese nivel de revisión dejó al descubierto el tamaño real del problema. Cada año comenzaba con un promedio de 9,575 observaciones pendientes, y la administración generaba 11,713 nuevas. La corrupción no solo estaba presente, sino que rebasaba por miles cualquier capacidad inmediata de control. El sexenio demuestra que, cuando se revisa a fondo, aparecen los hallazgos, y con ellos, la magnitud del desorden.

4

Ese esfuerzo técnico vino acompañado de un resultado financiero inusual. **Fox encabeza el único periodo en el que la auditoría logró recuperar más recursos de los que costó ejercerla. Con cifras constantes de 2018, las recuperaciones reales promediaron 11,129.4 millones de pesos por año, mientras que el gasto en fiscalización fue de 6,504.9 millones. Por cada peso invertido en revisar, el Estado recuperó 1.71.** Fue la última vez que el sistema operó con esa eficiencia. No solo se documentaron irregularidades. También se logró que el dinero mal usado regresara al presupuesto público.

Además, este sexenio fue el que reportó más casos de presunta responsabilidad. El promedio anual llegó a 1,541.7. El sistema no se limitó a observar, también avanzó hacia la sanción, una práctica que con el tiempo se fue debilitando. A pesar de que el rezago no disminuyó de forma significativa y cerró con un promedio de 9,143 observaciones pendientes, sí se contuvo y se enfrentó. El periodo de Fox deja una lección clara, la corrupción era extensa, pero podía medirse, podía verse y podía enfrentarse cuando la auditoría funcionaba con toda su capacidad.

Felipe Calderón: cae la intensidad, pero la corrupción sigue siendo visible

Durante el gobierno de Felipe Calderón, la administración panista mantuvo activo el sistema de control. El promedio anual de actos de fiscalización fue de 2,845. La Auditoría detectaba más de 10,958 nuevas y se solventaron 11,216 cada año. El aparato institucional seguía teniendo capacidad para detectar irregularidades y empujar hacia la sanción.

Durante los dos gobiernos del PAN, el Estado conservó herramientas para verla. Fox permitió conocer su dimensión. Calderón mantuvo esa visibilidad.

PRI (Peña Nieto, 2013–2018): la Auditoría en cámara lenta y la corrupción fuera de foco

El sexenio de Enrique Peña Nieto marca un punto de quiebre en la trayectoria institucional de la auditoría gubernamental. No se elimina el sistema, pero pierde fuerza, pierde profundidad y deja de corregir de forma efectiva. Los datos muestran con claridad que la estructura de control interno se mantiene en pie, pero su capacidad de observación y sanción se debilita. El aparato sigue operando, aunque lo hace con menor alcance y con una mirada más superficial.

5

Durante esos años, el número de contralorías internas se mantiene prácticamente igual. El promedio es de 217 unidades, apenas por debajo del nivel observado con los gobiernos del PAN. Esto descarta cualquier explicación estructural. **El problema no está en el tamaño del sistema, sino en cómo se usa. El PRI mantiene el esqueleto, pero baja la intensidad del escrutinio. Y cuando se revisa menos, también se encuentra menos.**

La actividad de fiscalización lo confirma. El promedio anual es de 2,219.2 auditorías, muy por debajo del nivel que tuvo Calderón con 2,845.2 y aún más lejos del ritmo alcanzado durante el sexenio de Fox. Con menos revisiones, la capacidad de detección se reduce. Cada año se identifican en promedio 8,872.7 observaciones nuevas, frente a las más de once mil que se documentaban en los sexenios panistas. El saldo inicial, que promedia 5,738.2 observaciones, es bajo no porque el sistema esté más limpio, sino porque la auditoría está generando menos hallazgos. El Estado detecta menos, no porque haya menos que ver, sino porque ha dejado de mirar con la misma intensidad.

La pérdida de capacidad también se refleja en el plano económico. En precios constantes de 2018, las recuperaciones reales promedian 2,071.6 millones de pesos por año, mientras que el costo de auditar es de 3,974.5 millones. **El sistema deja de ser autosustentable. Por cada peso invertido en fiscalizar, el Estado recupera apenas 0.52. La caída es evidente.** Con el PRI, llega a su punto más bajo hasta ese momento. La auditoría deja de ser una herramienta efectiva y pasa a ser un gasto sin retorno claro.

A pesar del debilitamiento, el sistema conserva cierta funcionalidad. En promedio, se solventan 9,405 observaciones al año dentro de un universo de alrededor de 14,600. El saldo final, 5,478.5 observaciones pendientes, apenas se mueve respecto al punto de partida. Esto no representa una mejora. Lo que ocurre es que el sistema se vuelve más limitado. **Ingresa menos, se detecta menos, se resuelven los casos más simples y el resto queda fuera del alcance. No hay reducción del rezago, ni se enfrentan los temas complejos. Lo que queda es**

una operación administrativa de bajo volumen, que produce una sensación de orden basada en mirar menos, no en mejorar.

Donde la pérdida de fuerza se vuelve más evidente es en los casos de presunta responsabilidad. Bajo el gobierno de Peña Nieto, el sistema solo genera 282.2 casos al año en promedio. Esta cifra es la más baja de toda la serie histórica hasta la llegada de Morena. Fox llevaba más de 1,500 casos por año, Calderón casi 550, pero con el PRI la cifra cae por debajo de 300. La explicación no es que haya menos irregularidades. Lo que pasa es que los hallazgos ya no escalan hacia el proceso sancionador. Se audita menos, se recupera poco y se sanciona aún menos.

6

La contradicción política es evidente. Mientras el discurso oficial hablaba de modernización institucional, de reformas estructurales y de un Estado renovado, los datos muestran otra cosa. Lo que se tiene es una auditoría débil, con bajo rendimiento, poco rigor técnico y sin impacto en la vía de responsabilidades administrativas o patrimoniales.

También hay una contradicción operativa. El sistema logra mantener una tasa alta de casos resueltos, pero sobre una base muy reducida de observaciones. Esto no es eficiencia. Es un efecto de haber cerrado el embudo. El sistema ya no ingresa lo complejo, trabaja sobre menos casos y esa es la razón por la que el rezago parece estable. Lo que ocurre es que se detecta poco, se revisa poco y se enfrenta menos.

Al final, aparece el rasgo más preocupante de todo el periodo, el Estado, bajo el gobierno de Peña Nieto, se acostumbra a “ver” menos. La auditoría se vuelve un ejercicio correcto en lo técnico, pero cómodo en lo político. **El sistema no desaparece, pero se vuelve lento, no confronta a la corrupción y vuelve a las fallas invisibles. Es en este momento cuando la auditoría deja de actuar como contrapeso real y se convierte en una oficina más dentro del aparato administrativo.**

4T (López Obrador, 2019–2024): el discurso más fuerte contra la corrupción con los peores resultados de auditoría

El sexenio del gobierno de Morena representa el periodo más contradictorio de toda la serie histórica entre 2001 y 2024. Se trata de una administración que construyó su identidad política sobre la promesa de erradicar la corrupción, que hizo de la honestidad su eje discursivo y que señaló sistemáticamente al PAN y al PRI como responsables del desorden administrativo acumulado. Sin embargo, los indicadores técnicos de la auditoría gubernamental —la única herramienta que permite medir la corrupción institucional de forma objetiva— muestran que **Morena cierra con los peores resultados de todos los sexenios**

analizados: hay menos auditorías, menos hallazgos, menos recuperaciones, menor capacidad correctiva y una estructura claramente debilitada.

El promedio de contralorías internas desciende a 198.5 unidades, el número más bajo del que se tiene registro reciente. No hay evidencia de una reforma orientada a mejorar la eficiencia; lo que existe es una disminución directa en el número de órganos de control, lo cual reduce desde el inicio la cobertura operativa, la capacidad técnica y la presencia institucional del aparato de vigilancia. **Si la corrupción es estructural, como sostiene el discurso oficial, la lógica indicaría que debería haberse fortalecido esta infraestructura. Lo que ocurrió fue exactamente lo opuesto.**

7

La pérdida de capacidad es aún más clara en el número de actos de fiscalización. Entre 2019 y 2024 se realizaron en promedio 1,950 auditorías anuales. Es el registro más bajo de toda la serie. Fox realizaba casi 5,000 por año; Calderón, cerca de 2,845; Peña Nieto, alrededor de 2,219. Morena se queda por debajo de todos. El país no está siendo más revisado y cuando se reduce la revisión, se reduce también la posibilidad de encontrar fallas. **La primera gran contradicción del sexenio es que, mientras el discurso insiste en limpiar, la práctica disminuye la capacidad para ver lo que se debe limpiar.**

La caída en la vigilancia lleva inevitablemente a una caída en los hallazgos. Durante este sexenio, se detectaron en promedio 6,681 observaciones nuevas por año, el dato más bajo desde que se tiene información comparable. El saldo inicial de observaciones pendientes fue de 5,046.3, también por debajo de los niveles anteriores, pero no como resultado de una mejora en el orden institucional, sino porque el sistema procesa menos casos. El saldo final, 5,072.2 observaciones, prácticamente el saldo inicial. No hay avance. El aparato de fiscalización mantiene congelado el rezago, con el mismo volumen de irregularidades al inicio y al final. La auditoría, bajo Morena, opera en punto muerto, existe, pero no trabaja.

La dimensión económica confirma la tendencia. En precios de 2018, las recuperaciones reales anuales promedian 1,229.7 millones de pesos. Es la cifra más baja de toda la serie. Incluso Peña Nieto, con un aparato ya debilitado, recuperaba el doble. Por el contrario, los costos reales promedio de la auditoría durante este sexenio ascienden a 2,779.4 millones. **El resultado es un rendimiento negativo. Por cada peso invertido, el Estado solo recupera 44 centavos. Esta es la peor relación en más de veinte años.** La fiscalización deja de ser una herramienta eficaz para recuperar dinero público y se convierte en un aparato costoso con bajo retorno operativo.

Hay un dato que, en apariencia, podría interpretarse como avance: el promedio anual de casos de presunta responsabilidad asciende a 670.5, por encima de los 282.2 registrados con Peña y los 547.8 con Calderón. Pero este aumento no refleja una auditoría más efectiva. Representa otra contradicción. **Morena logra más casos con la mitad de auditorías, con menos hallazgos y con la menor cantidad de recuperaciones. El sistema genera más sanciones a partir de una base de revisión más pequeña. Lo que se observa no es una mayor cobertura ni una fiscalización más profunda, sino una operación más selectiva, se castiga más desde una base reducida con prioridades concentradas.**

La contradicción operativa también es visible. El sistema solventa en promedio 6,958.5 observaciones al año, pero lo hace sobre un universo cada vez más pequeño. El rezago permanece. No hay avance. Sin capacidad para detectar, no hay saneamiento. Sin intensidad, no hay depuración. Sin profundidad, no hay control real. El sistema sigue en marcha, pero no procesa lo suficiente como para corregir el desorden.

La contradicción estructural es aún más amplia. Si el combate a la corrupción fuera efectivamente la prioridad del sexenio, los datos mostrarían un incremento en la inversión, un mayor número de auditorías, más observaciones nuevas y una recuperación más alta de recursos públicos. Lo que muestran los datos es lo contrario. Morena redujo la estructura, disminuyó la vigilancia, detectó menos, recuperó menos y mantuvo intacto el rezago. Al mismo tiempo, intensificó un discurso que no se respalda en los indicadores técnicos.

En conclusión, el gobierno de Morena es el que más promete erradicar la corrupción, pero también el que más contribuye a invisibilizarla desde las instituciones. No porque la elimine, sino porque la revisa menos. No porque la corrija, sino porque casi no la detecta. No porque depure el sistema, sino porque lo mantiene congelado. Es, la etapa más débil de la auditoría gubernamental en dos décadas.

Conclusión

El análisis comparado entre los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena muestra una transformación clara del sistema de auditoría gubernamental en México, aunque en una dirección distinta a la que sugiere el discurso político. Los datos revelan tres etapas diferenciadas: el PAN enfrentó la corrupción al permitir verla; el PRI optó por administrarla mediante una fiscalización de menor intensidad; Morena, mientras proclamaba haberla erradicado, la volvió menos visible.

Los dos gobiernos del PAN (2001–2012) no resolvieron el problema estructural, pero conservaron la capacidad institucional para identificarlo, documentarlo y combatirlo. Con Fox, el sistema alcanzó su mayor nivel de revisión, con casi cinco mil auditorías por año, recuperaciones por encima de once mil millones de pesos reales y más de mil quinientos casos de presunta responsabilidad anuales. Con Calderón, la intensidad baja, pero el aparato sigue funcionando: se detectan miles de irregularidades, se mantienen flujos elevados de observaciones y la estructura conserva capacidad correctiva.

El gobierno del PRI, bajo Peña Nieto (2013–2018), inicia una etapa distinta: la Auditoría en cámara lenta. Se reduce el número de auditorías, se detectan menos observaciones, las recuperaciones bajan y los casos de responsabilidad caen a mínimos históricos. Con 2,071.6 millones de pesos recuperados anualmente frente a casi cuatro mil millones en costos, la auditoría deja de ser rentable. Con apenas 282 casos de responsabilidad por año, también deja de ser incómoda. Peña Nieto no desmonta el sistema, pero reduce su impacto. El aparato se vuelve correcto en lo técnico, pero inofensivo en lo político.

Con el gobierno de Morena (2019–2024) ocurre la ruptura más profunda. Es el periodo con los resultados más bajos de toda la serie. Tiene el menor promedio de contralorías (198.5), la menor cantidad de auditorías anuales (1,950), la cifra más baja de observaciones nuevas (6,681), la peor relación recuperación/costo (0.44) y un rezago que no se reduce. El aparato de control no se fortalece. Se debilita. La capacidad de revisión se estanca, mientras crece el número de casos de presunta responsabilidad sobre una base cada vez más reducida. Esto no refleja un sistema más eficaz, sino uno que actúa con criterios de selectividad política más que con lógica institucional.

La contradicción del periodo no es solo de cifras. Es también estructural y política. El gobierno de Morena combina tres características que lo separan de las administraciones anteriores:

Autoritarismo porque centraliza las decisiones, reduce la estructura de control, limita la fiscalización independiente y emplea las sanciones como instrumentos de presión más que como parte de un proceso institucional completo. No amplía la revisión. La reduce, pero intensifica el castigo dentro de un espectro más limitado.

Incongruencia al proclamar un combate frontal a la corrupción mientras opera con los indicadores más bajos de las últimas dos décadas. La narrativa niega lo que los datos muestran un aparato que detecta menos no porque la gestión esté limpia, sino porque la capacidad para ver ha sido recortada.

Ineficiencia con la relación recuperación/costo más baja de todo el periodo (0.44), una caída sostenida en la detección y una capacidad correctiva congelada, la auditoría bajo Morena no mejora el funcionamiento del Estado. Lo vuelve menos eficaz y menos apto para proteger los recursos públicos.